

## La hospitalidad con los migrantes africanos que atraviesan nuestras fronteras

Durante años los gobiernos centroamericanos, pudieron silenciar la llegada de africanos a nuestras fronteras. Ahora es imposible. Llegan miles... y seguirán llegando. No son sólo “razones económicas” ni el imán del “sueño americano” las que los traen hasta nosotros. La reflexión sobre sus motivos puede incentivar la solidaridad y la hospitalidad con ellas y ellos. Estos africanos son una fracción de los 65.3 millones de desplazados forzosos, 33,972 desplazados diarios, 21.3 millones de refugiados y 10 millones de apátridas que ACNUR contabiliza en 2016. En un mundo interconectado es imposible que Centroamérica no sea tocada y hollada por los que huyen de sus países en busca de mejores condiciones de vida. O, simplemente, de vida.



Extranjeros esperan para ser trasladados a un albergue de Migración  
Foto Prensa Libre Edwin Paxtor.

Según un informe del ACNUR sobre las tendencias globales de refugiados en 2015, las principales fuentes de solicitantes de refugio son Siria, Afganistán, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, República Central Africana, Myanmar, Eritrea y Colombia. A Centroamérica han llegado ciudadanos de al menos cinco de esos países. Pero los

gobiernos de la región han querido permanecer como si estos desplazamientos no existieran y han tomado partido por el bando de quienes no están dispuestos a solidarizarse con los pobres del mundo.

La migración de africanos y su paso por Centroamérica, que ahora resulta ya imposible de ignorar, pasó desapercibida para la opinión pública durante varios años. Ahora, las políticas de rechazo y el aumento del volumen han surtido el efecto de hacerla más visible. Los gobiernos centroamericanos tienen por costumbre común no hacer públicas las cifras de detenidos en sus centros de detención de migrantes. Pero un indicio de su

volumen y composición -aunque siempre incompleta porque se concentra en detenidos- es la que ofrece la Unidad de Política Migratoria del gobierno mexicano, que reporta africanos en las cifras de “alojados” que aparecen en sus boletines estadísticos. No registra personas, sino “eventos”, las veces que han sido detenidos migrantes.

En 2010 se llegó a la cifra sin precedentes de 1,282 eventos de detención de africanos, con 723 de Eritrea, 311 de Somalia y 167 de Etiopía en los primeros lugares. En 2011 hubo 287 eventos de africanos detenidos, con una mayoría de 136 eritreos. En 2012 fueron 323. En 2013 hubo 545 detenciones. En 2014 llegaron a 785, con 403 de Somalia, 169 de Ghana y 83 de Eritrea. En 2015 hubo un salto hasta alcanzar 2,078 detenciones, con 864 de Somalia, 631 de Ghana y 155 de Eritrea. El primer semestre de 2016 superó a todo el año 2015 con 3,689 detenciones, 1,982 de República Democrática del Congo, 396 de Ghana, 237 de Senegal, 208 de Somalia, 196 de Mali y 140 de Eritrea. Este registro nos permite ver las proporciones en que aumenta el número de migrantes africanos y cómo y cuándo se van añadiendo nuevas nacionalidades.

Otra fuente es el Department of Homeland Security (DHS), con datos de un arribo a Estados Unidos ascendente de refugiados de Eritrea desde los 327 en 2005 hasta los 1,488 en 2014, pasando por un pico de 2,570 en 2010. Los de Somalia totalizaron 64,007 en ese período. Y los de la República Democrática del Congo, que apenas empiezan a ser detectados por la migra mexicana y sus homólogas centroamericanas, eran 1,535 en 2009, pasaron a 3,174 en 2010 y llegaron a 4,540 en 2014.

Estas cifras nos permiten establecer que el flujo de africanos ha sido muy superior al detectado -o declarado- por las policías migratorias del istmo centroamericano. Sus estadísticas han buscado minimizar ese tránsito, invisibilizar a los africanos, propósito que se tornó irrealizable cuando los africanos cambiaron sus rutas y, en lugar de entrar por barco a las costas atlánticas de Centroamérica, donde eran capturados, empezaron a cruzar masivamente por tierra los patios de los centroamericanos.

Durante años los gobiernos centroamericanos pudieron silenciar la llegada de los africanos y otros solicitantes de refugio. Pero ahora se ha convertido en un asunto muy mal manejado, plagado de dimes y diretes entre los funcionarios gubernamentales de la región. Es un test que desnuda ante el público un flanco inoperante del Sistema de Integración Centroamericana. Los Estados del istmo comen en el mismo plato de las políticas anti-inmigrantes. Pero esas políticas han entrado en colisión con la posibilidad de un frente único regional para tratar el tema del refugio. La política de “muro de contención” que aplica Nicaragua no resuelve el problema regional, sólo lo confina en su vecina Costa Rica.

Los migrantes se recetan solución por su propia mano, buscando a tientas los puntos ciegos por los que pasar a Nicaragua y luego al resto de países, ya que las legislaciones centroamericanas no los ayudan. La ley migratoria de Nicaragua prohíbe alojar a extranjeros en situación irregular a los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o negocios similares. Y los obliga a llevar un libro de registro de personas extranjeras, debidamente foliado y sellado por la Dirección General de Migración y Extranjería, institución a cuya disposición deberá estar ese libro. También impone una multa de 2,000 córdobas a los extranjeros que ingresen o salgan del país por un puesto fronterizo no habilitado y una multa de 50 córdobas por cada día de permanencia irregular.

El rechazo de los migrantes -de ciertos migrantes- no es un asunto nuevo ni exclusivo de Nicaragua. La legislación anti-inmigrante está diseminada por toda la región y hunde sus raíces en un inveterado racismo. Los consorcios coloniales fueron muy activos en el tráfico de personas, con la venia de las coronas española y británica. Trajeron miles de esclavos africanos a Centroamérica. A El Salvador, el país donde la presencia africana ha sido más invisibilizada, llegaron africanos víctimas de una migración forzosa desde 1565 para trabajar en las plantaciones de añil y caña de azúcar. A finales del siglo 19 llegaron a contabilizarse allí 3,300 personas de raza negra. Convertidos por la xenofobia racista en una mancha nacional y objeto de un proceso de

ladinización, en el censo de 1930 apenas llegaban a 90. Aunque fue una reducción más ideológica que física, recibió un espaldarazo de la legislación migratoria que rigió en 1933-1959, mediante la cual quedó terminantemente prohibida no sólo la residencia, sino incluso el ingreso -así fuera sólo para el tránsito- de chinos, mongoles, negros, malayos, gitanos (húngaros) y de árabes, libaneses, sirios, palestinos, entre otros llamados “turcos”, ex-súbditos del imperio otomano. La ley de migración salvadoreña y su reglamento de 1959, vigente hasta la fecha, recoge el mismo espíritu que su predecesora con un artículo número 10 que reza así: “En ningún caso se permitirá el ingreso al territorio nacional, en calidad de residentes temporales o definitivos, a las personas siguientes: a) las que padezcan enfermedades contagiosas; b) las que profesen ideas anárquicas o contrarias a la democracia; c) quienes en alguna forma puedan poner en peligro la tranquilidad o la seguridad del Estado; y d) aquellas cuya presencia en el territorio nacional constituya un peligro al interés público, a juicio prudencial del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia”. El inciso “b” fue derogado en 2005 por considerarse un atropello a la libertad ideológica. Los otros continúan vigentes.

No deja de producir perplejidad que El Salvador, un país con casi 2 millones de ciudadanos en Estados Unidos y cuya economía se sostiene a punta de remesas siga apegado a una legislación vigesimonónica implantada hace más de medio siglo. Para corregir este agujero negro la legislación se convierte en un embudo invertido -entrada angosta y salida ancha- mediante el decreto 655, “Ley especial para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia”, aprobada en 2011 por la Asamblea Legislativa. Para los salvadoreños que emigran o retornan, la ley de 2011. Y para los extranjeros, la ley de migración de 1959 y la de extranjería de 1986, ambas con algunas reformas a modo de parches correctivos.

En Honduras, una nueva ley migratoria entró en vigencia en 2004. Castiga con multas de hasta cinco salarios mínimos a las empresas de transporte que trasladen personas sin documentación migratoria y de hasta tres salarios mínimos a los indocumentados y a quienes les den empleo.

El mismo espíritu aletea sobre la legislación migratoria guatemalteca. Durante el gobierno de Álvaro Arzú y mediante el decreto 95-98, el Congreso guatemalteco estableció 10 categorías de visa y diversas penalizaciones a la inmigración irregular, incluyendo multas de hasta 700 quetzales por ingresos no autorizados y de 50 quetzales por persona a quienes hospeden a migrantes irregulares. La ley anticoyotes de 2015 sólo vino a profundizar este rechazo desde otro ángulo y con un barniz humanitario. Con todas estas medidas legislativas, los gobiernos de la región reproducen, al interior del país, los requerimientos que en Estados Unidos han complicado la vida y multiplicado las deportaciones de sus ciudadanos.

Algunos medios de comunicación han dado una cobertura a las migraciones que – voluntaria o involuntariamente- comulga con estas políticas. Expresiones como “tsunami humano” y “mar de personas”, que políticos y medios suelen emplear para referirse a esta migración, están en consonancia con la política nicaragüense que oficialmente se llama “muro de contención”. Igual podrían hablar de deslizamientos humanos y política de gaviones, de ríos de gente y programa diques... El tránsito de los africanos por la región aparece así entre una maraña de suposiciones y prejuicios. Se convierte en un evento cuya despolitización y descontextualización sirven de caldo de cultivo a su presentación como una ola amenazante, irracional, inexplicable y acaso portadora de los virus, taras extrañas y violencia que caracterizan las apariciones de África en la sección de noticias internacionales.

Los africanos pasan por Centroamérica porque las maldiciones coloniales y neocoloniales siguen creando condiciones expulsoras. Todos los países de origen de esos migrantes han sido objetos de interés de la geopolítica de las grandes potencias, atizada por el emprendedurismo de inversionistas innovadores y la geofagia del gran capital. Somalia y Etiopía fueron piezas en el ajedrez mundial de la guerra fría desde 1977. A final de los años 80, Somalia llegó a ser el mayor receptor de ayuda extranjera estadounidense. La ayuda, en gran medida militar, creó condiciones tecnológicas para

el surgir de luchas entre clanes, que han desestabilizado al país hasta la fecha. Su producto más acabado fue Al-Shabaab (La Juventud), una guerrilla islamista aliada de Al-Qaeda.

En 2007 Somalia fue coronada por Transparencia Internacional como el país más corrupto del planeta, lugar que ha conservado imbatible durante diez años y que sólo desde 2014 comparte con Corea del Norte. La corrupción se sumó a la sequía para producir la mayor hambruna que este país ha padecido desde su independencia. Ya en 2012 el periodista Jon Lee Anderson había escrito que “el número de personas que en Somalia dependen de la ayuda alimentaria internacional se ha triplicado desde 2007, pasando a una cifra estimada de 3 millones 600 mil personas”. Los señores de la guerra boicotean el ingreso de alimentos porque han declarado la guerra a Occidente y eso incluye a la ONU. Los alimentos llegan por avión y barco, y son distribuidos por trabajadores locales de ayuda humanitaria que los militantes del Shabaab asesinan sistemáticamente.

Sin menguar su condición de hervidero de corrupciones e inquinas entre clanes, ahora Somalia es el país de las jugosas oportunidades para inversionistas temerarios. La relativa confianza que inspira a las potencias occidentales el régimen de Hassan Sheikh Mohamud, con flamantes credenciales como ex-consultor y funcionario de la ONU, ha allanado el camino a los acaparadores de tierra. Somalia se encuentra entre los nueve países del África subsahariana en cuyas tierras los inversionistas tienen clavados sus embelesados ojos. Los saudíes invitan a los ministros y jefes de Estado de Somalia a los foros donde discuten sus futuras inversiones. De momento Somalia sigue siendo más importante en la geopolítica de la lucha contra los integristas islámicos. Etiopía, su vecino e inveterado rival, le ha tomado la delantera en la gran subasta mundial de tierras.

Después de décadas de oscurantismo y sometimiento a Su Magnánima Majestad Haile Selassie y tras un régimen comunista que casi extermina los bosques, Etiopía es hoy la meca de los nuevos inversionistas en agrocombustibles y alimentos. Hasta 2011

habían sido asignadas 1 millón de hectáreas y 3 millones más estaban en proceso de negociación, una superficie igual a la de Bélgica. The National Biodiesel Corporation (alemana, israelí, estadounidense, tres eternos amienemigos) tiene 190 mil hectáreas. Los mayores acaparadores en ese país son la India Varun International con 600 mil hectáreas, Saudi Star Agricultural Development Plc. con 500 mil y la también India Karuturi Global Ltd. con 300 mil. Otros inversores en ese país en producción de agrocombustibles son empresas con sedes en Gran Bretaña (80 mil hectáreas), Malasia (31 mil), Dinamarca y los Emiratos Árabes Unidos.

Los saudíes, que no tienen problemas de combustible pero sí de alimentos, han hecho de Etiopía su huerto nacional. Por mandato expreso de su monarquía, sus empresas salieron a la cacería de tierras, donde cultivan arroz, trigo, maíz, palma, café, rosas, pimientos, remolacha y otros vegetales. Es obvio que, como apuntan sus defensores, estas inversiones generan empleo. Pero descuartizan frágiles sistemas alimentarios. No hacen más que trasladar el problema alimentario desde quienes pueden pagar por su seguridad hacia quienes tienen mano de obra y tierras adecuadas pero no el capital. El periodista Stefano Liberti lo sintetiza así: “Esos carnosos tomates, esos pimientos rojos, verdes y amarillos, esas berenjenas lisas como la piel de un niño no están destinados a los etíopes, sino a los más ricos consumidores de los países árabes del Golfo”. El gerente de la Jittu International remacha este punto: “Lo que producimos aquí es para la exportación. En veinticuatro horas podemos hacer llegar nuestros productos desde el campo al consumidor, en cualquier restaurante de Dubái”. Todo es extranjero en ese enclave: el capital árabe, las semillas y el director-agrónomo que vinieron de Holanda, la estructura de los invernaderos diseñada por ingenieros españoles, los fertilizantes europeos y el sistema de riego computarizado que requiere hardware y software de diversos países industrializados.

No es posible establecer una correlación unívoca entre la migración y el acaparamiento de tierras. Pero es un hecho que los etíopes empezaron a transitar a través de Nicaragua en números notorios en 2007, año en que el Ministerio de Minas y Energía

introdujo la producción de agrocombustible como una estrategia de desarrollo. La producción en sí está en sus comienzos. En los primeros cuatro años se llevó a cabo la distribución de tierras y la siembra. La excepción era la fábrica de azúcar Fincha, que desde 1999 generaba 8 millones de litros de etanol de melaza. Desde entonces las plantaciones se han diversificado para producir combustible a partir de jatropha, aceite de palma y de ricino. Etiopía es un país que puede subastar 23 millones 305 mil 890 hectáreas aptas para cultivos de agrocarburentes. Hasta 2011 habían sido asignadas entre 1 millón y medio y 2 millones. Tres millones adicionales serían alquiladas en los siguientes cinco años a un costo anual de entre 6.89 y 80 dólares. Las más atractivas son las 700 mil hectáreas que pueden ser irrigadas con aguas del río Awash. La carrera por hacerse con esas tierras ya empezó. Al gobierno le tiene sin cuidado que sus ciudadanos se estén manifestando contra una geofagia que pone en peligro su seguridad alimentaria.

En el extremo oeste de África, Ghana es uno de los destinos más prometedores de la producción de agrocombustibles. Son 10 regiones las que se dedican en ese país a la nueva panacea pa'salir de pobre. Ghana alquila 55 mil hectáreas a un consorcio de empresarios que incluye a brasileños, noruegos, holandeses, suecos, alemanes, chinos y británicos, todos hermanados por el cultivo de jatropha para producir biocarburentes. Allí la jatropha compite con los alimentos.

La República Democrática del Congo, otro país emisor de los migrantes que atraviesan Centroamérica, concedió 8 millones y 2 millones 80 mil hectáreas a una empresa sudafricana y a una china (Zhongxing Telecommunications), en el primer caso para alimentos y en el segundo para agrocarburentes a partir de palma africana. La inversión China ha sido puesta en duda por algunas fuentes, pero otras la confirman y sostienen que el Estado congolés contribuyó con más de 10 millones de hectáreas a las 51-63 millones de hectáreas que en África se han negociado mediante 177 acuerdos. Oxfam Novib y la International Land Coalition han identificado más de 1,200 acuerdos (de intención y de inversión) entre 2000 y 2010, con un total de 80 millones



de hectáreas arrendadas. Lo que sucede en el Congo es un caso extremo porque el área negociada representa casi la mitad del área apta para la agricultura.

El acaparamiento de tierras se ha cebado sobre los países de donde provienen los migrantes africanos que transitan por Centroamérica. Y aunque, como en muchos fenómenos sociales, no sea posible establecer límpidas correlaciones unívocas, es imposible no atender al hecho de que ese acaparamiento está operando como una fuerza ciega expulsora, con la misma eficacia de los cercamientos -legitimados por las enclosures acts- en la Inglaterra de los siglos 18 y 19, pero como una fuerza sistémica, donde los villanos son invisibles, pues sólo nos es dado ver el último eslabón -las compañías que alquilan, siembran y producen- y no los primeros -los pensionistas, por ejemplo- ni los intermedios -los especuladores financieros-. Sin embargo, numerosos estudios han dado cuenta de los vasos comunicantes entre acaparamiento de tierras y seguridad alimentaria. Falta otro elemento para el trípode: la migración.

Los países donde la tierra cultivada no está al servicio de sus habitantes son aquellos de los que provienen los migrantes africanos que pasan por la región. Los “eventos” de ciudadanos de la República Democrática del Congo detenidos en México que apenas fueron uno en 2014 y ocho en 2015, saltaron a 1,982 en el primer semestre de 2016. La presencia de ciertas nacionalidades entre los detenidos por las migras del mundo se expande al ritmo y en la dirección de las inversiones en agrocombustibles. No es mera coincidencia que en ese país casi la mitad de las tierras cultivadas estén destinadas a esa industria o a la producción de alimentos para la exportación.

Invertir en stocks de alimentos y agrocombustibles se ha convertido en una de las actividades que más reeditúan. Los petrodólares que fluyen hacia plantaciones en África son la mejor carta de recomendación. El hambre vende: el hecho de que China pueda convertirse en un futuro no tan lejano en un mercado de alta demanda (tiene el 20% de la población mundial y sólo el 7% de la tierra cultivable) le augura a este mercado y a su casino un dinámico porvenir.

La República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Nigeria, Mali, Liberia, Madagascar, Senegal, Sudán, Tanzania y Zambia, por mencionar sólo los casos más extremos, son naciones cuyos territorios se alquilan por unos centavos a países y hombres de negocios que ahora extienden sus dominios y adquieren áreas con las condiciones de clima o de suelos de las que carecen sus territorios “de partida”. El colonialismo tiene ahora la forma de una relación contractual entre dos pandillas de burócratas embutidos en sacos: los que efectivamente representan a los inversores y los que dicen representar a los ciudadanos del país en alquiler. Los ministros asisten a los foros a ofrecer sus tierras a menor precio. Etiopía se vende por entre 6 y 25 euros por hectárea, según la calidad del suelo y la localización. Como este precio le pareció astronómico a la empresa india Karuturi, negoció otro acuerdo con el gobierno etíope por las 400 mil hectáreas que cultiva: cero costo durante los primeros 6 años y 60 centavos de euro en los siguientes 84 años.

Los informes de Transparencia Internacional y el índice de Doing Business in a More Transparent World del Banco Mundial, que clasifica a los países por su nivel de transparencia y seguridad en las transacciones empresariales en firmas domésticas, nos posibilitan ver la coincidencia que existe entre países más corruptos y países que más están atrayendo la inversión extranjera. Los países más desaconsejados por el Banco Mundial para las firmas locales son los que más están captando inversores extranjeros en comestibles y combustibles amigables con el medio ambiente. Se diría que los empresarios quieren jugar a “negocios extremos” si no supiéramos que, antes que la transparencia y una legislación justa y aplicada con rigor, los negocios prosperan cuando tienen las conexiones adecuadas.

### **Así en Centroamérica como en África**

También Centroamérica ha estado en subasta. Tras la firma en Guatemala de los Acuerdos de Paz en 1996, el Banco Mundial le aconsejó a un obediente Presidente Álvaro Arzú la modernización del sector minero. Modernizar significa que ahora las empresas mineras son 100% propiedad de extranjeros, además de un bajón del

impuesto sobre la renta de 58% a 31% e ingentes cantidades de agua gratuita para las empresas, en un país donde los ciudadanos comunes tienen que pagar hasta 140 dólares mensuales por el agua. Honduras es el caso más emblemático de acaparamiento de tierras con la contrarreforma agraria que protagonizaron principalmente Miguel Facussé, René Morales Carazo y Reinaldo Canales cuando en 1990-1994 compraron para la plantación de palma africana 20,930, cerca de tres cuartos, de las 28,365 hectáreas que la reforma agraria de los años 60-70 adjudicó a familias campesinas.

La minería es la nueva industria que engulle tierras y agua. Las extensiones concedidas por el gobierno no son de momento tan descomunales como las de los países africanos, pero no causan menos destrozos en las aldeas afectadas. La empresa canadiense Aura Minerals, que opera en Honduras a través de Minerales de Occidente S.A., está tragándose la comunidad de Azacualpa, Copán, ocupando sus tierras y contaminando su medio ambiente. Las 800 concesiones mineras metálicas y no metálicas que ha concedido el gobierno hondureño desde los años 80 son el gran enclave tragatierras que ha transformado una república bananera en una república minera, sustituyendo el rubro productivo, pero con idénticos métodos y prebendas.

Nicaragua también es candidata al acaparamiento de tierras. Un primer paso fueron las concesiones mineras concedidas durante el gobierno de la UNO en 1990-1997. El mayor paso es el más reciente: es imposible no ubicar entre esta bola de ofrecidos la abyecta concesión canalera de Nicaragua de 2013, que no traerá un canal, pero sí amenaza con ser un poderoso artefacto jurídico para redistribuir tierras. También hay casos de acaparamiento de agua: el de los arroceros que han dejado sin agua a los pobladores de Tisma y Malacatoya y han convertido esas zonas en una superficie lunar y en un nido de expulsiones. El visionario Judson Hill, director ejecutivo de NGP-Global Adaptation Partners, señaló el nuevo El Dorado a los futuros inversionistas en una conferencia que en Ginebra organizó la agencia estadounidense Soyatech: “El agua es

la próxima frontera. El agua será cada vez más escasa. El desarrollo de la agricultura tendrá cada vez más necesidades: hay que apuntar hacia ese sector”.

Estas dinámicas son a la vez económicas, políticas y demográficas, si las simplificamos al mínimo. Son tejidos de fenómenos que conectan lugares y protagonistas que actúan en sitios distantes del planeta: inversores noruegos en agrocombustibles y saudíes en alimentos, la bolsa de Chicago donde se negocian las acciones ligadas a las inversiones en alimentos, pensionistas de Minnesota y Ottawa cuyos fondos de pensión fueron colocados en esa bolsa, agrónomos holandeses que dirigen las plantaciones e ingenieros españoles que diseñan el riego, propietarios de vehículos en Brasil que optan por el etanol en lugar de la gasolina, los gobiernos de Bush y Obama que incentivaron la producción de maíz para los agrocombustibles y los agricultores de Iowa que reciben los subsidios, consumidores de tomates y zanahorias etíopes en los Emiratos Árabes, obreros agrícolas en Ghana y Tanzania, activistas por la seguridad alimentaria en Senegal, campesinos congolese que compiten por los recursos hídricos con las grandes plantaciones, entre muchos otros eslabones de esta cadena sin fin que enlaza acontecimientos y personas a primera vista inconexos, como en la película “Babel” de Alejandro González Iñárritu.

La complejidad que implican estos procesos y la maraña de sus protagonistas hace más difícil el rastreo de las causas de las expulsiones. Las responsabilidades son muy elusivas. Penden de hilos morales y políticos traslúcidos y demasiado largos para dar con el otro extremo. La conexión entre las políticas agrícolas y las expulsiones que desencadenan no es visible a primera vista porque siempre está envuelta en una nebulosa de promesas: empleo, transferencia tecnológica y compromiso con el medio ambiente. Puede sonar rebuscado establecer la cadena causal que va desde unos jubilados en Estados Unidos y unos refugiados en Etiopía. Sin embargo, son nexos que existen y pueden ser establecidos. En el caso de los jubilados, la variable clave es la especulación con los fondos de pensiones que, ante la crisis alimentaria de 2007 y el

descalabro de otras inversiones, la vivienda, por ejemplo, hizo de las inversiones en comestibles la nueva fiebre del oro del siglo 21.

La socióloga holandesa Saskia Sassen sostiene que la lógica del mundo globalizado ha alcanzado unos niveles de complejidad sin precedentes, que distinguen los nuevos patrones de acumulación de sus antecesores. Los acuerdos legales y los inmensos abanicos de posibilidades que ofrecen los instrumentos financieros devienen en conexiones antes inimaginables. Un ejemplo es la política ambiental interestatal más “innovadora”: el comercio de carbono. Los países industrializados expanden su derecho a polucionar el planeta mediante el pago a otros países por el secuestro de carbono, entre otras formas, financiando sistemas de producción silvopastoriles. En otro ámbito -el de los tapetes verdes de las finanzas-, esa complejidad de hiperlucro sin reposo se manifiesta en la expansión del rango de lo financiable: la posibilidad de embargar los medios de vida, la posibilidad de especular con grandes stocks de alimentos. Estos intercambios y esta capacidad de las finanzas de permear nuevos territorios son elementos nuevos de esta nueva complejidad.

La conexión de esas complejidades con los desplazamientos de población obedece a dinámicas sistémicas. Por eso Sassen habla de expulsiones. Así pone en evidencia la articulación entre fenómenos que aparecen como inconexos y cuya vinculación sólo es percibida en un nivel más subterráneo, cuando trascendemos las categorías que nos son familiares y con las cuales hemos segmentado el mundo: economía capitalista, China comunista, África subsahariana, medio ambiente, finanzas...

El resultado consiste en que la característica prevalente de esta fase del capitalismo son las expulsiones: desalojos en Alemania, España, Hungría, Inglaterra y Estados Unidos de quienes no pueden pagar las hipotecas de sus viviendas, desplazamientos de campesinos en África y América Latina por los acaparamientos de tierras y la competencia y/o escasez de recursos hídricos, movilidad hacia nuevos territorios por contaminación del agua, abruptos cambios en los patrones de asentamiento humano por los desastres naturales asociados al cambio climático...

Los africanos que intentan atravesar Centroamérica son una más de las poblaciones afectadas por estas expulsiones que caracterizan la actual fase del capitalismo. El hecho de que algunos hayan sido expulsados del mejor de los mundos posibles -un mundo que busca combustibles menos contaminantes, unas empresas que ponen a producir tierras antes improductivas, unos inversores que buscan el mayor rendimiento para los fondos de pensiones- es sólo una muestra de que el infierno continua siendo empedrado con las mejores intenciones.

Por lo que a ellos toca, ya que la conciencia de sus expulsores está impoluta, van en busca de la meca de las bondades y de los criaderos de conciencias autosatisfechas. Por lo que a los centroamericanos nos corresponde, debemos saber que estos aspirantes al refugio no salieron de sus países sólo por el imán del sueño americano. Nuestra solidaridad con ellos se funda, sin duda, en la justicia, en el sentido de responsabilidad por los otros y en el hecho de ser un solo cuerpo. El hecho de ser un solo cuerpo en la actualidad se manifiesta en esas formas de interconexión que llamamos globalización y en el hecho de que las expulsiones, que también afectan a los países de nuestra región, nos hermanan con ellos y nos demandan hospitalidad con aquellos a los que Aimé Césaire en “Cuaderno de un retorno al país natal” describió como “los que no han inventado ni la pólvora ni la brújula / los que nunca han sabido domar ni el vapor ni la electricidad/los que no han explorado ni los mares ni el cielo / pero conocen todos los rincones del país del dolor / los que de los viajes sólo saben los desarraigos”.

**José Luis Rocha**

Investigador

Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales.

Vicerrectoría de Investigación y Proyección

Universidad Rafael Landívar